

IRLANDA

INCRIMINACIÓN DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

(LEY 11/2012 de JUSTICIA PENAL)¹

Mercedes Vidal Gallardo

Profesora Titular de Derecho Eclesiástico del Estado
Universidad de Valladolid

I.- COORDENADAS NORMATIVAS

Al mismo tiempo que las Naciones Unidas avanzaban en el reconocimiento del valor de la dignidad humana –desde mediados de los años 40– la ONU también creó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en el año 1946, para seguir de cerca la situación de la mujer y promover sus derechos, realizando un gran esfuerzo que culminó el 18 de diciembre de 1979 cuando se aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención que entró en vigor en 1981. De un modo aún muy genérico, su art. 5 sentó las bases para la posterior regulación de las mutilaciones genitales femeninas al establecer que los Estados parte *tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas*

¹ Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación “Instrumentos jurídicos de integración de la diversidad”, DER2009-06965. (Subprograma JURI). Con el patrocinio de la Dirección de Política Científica de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno del País Vasco. Grupo consolidado del Sistema Universitario del País Vasco.

consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Asimismo, con el objetivo de examinar los progresos realizados al aplicar esta Convención, el Art. 17 estableció la creación de un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer –más conocido por sus iniciales en inglés, CEDAW– para examinar los informes presentados por los Estados parte y emitir recomendaciones.

Precisamente, fue una de esas recomendaciones –la número 14, de 1990– la que abordó, ya de manera específica, la *continuación de la práctica de la circuncisión femenina y otras prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de la mujer*, recomendando a los Estados que adoptaran medidas apropiadas y eficaces encaminadas a erradicarlas. Dentro de estas medidas, merecen especial mención las siguientes:

- Recopilar y difundir los datos básicos sobre esas prácticas tradicionales por las universidades, las asociaciones de médicos o de enfermeras, las organizaciones nacionales de mujeres y otros organismos;
- Prestar apoyo –a nivel nacional y local– a las organizaciones de mujeres que trabajan en favor de su eliminación;
- Alentar a los políticos, profesionales, dirigentes religiosos y comunitarios en todos los niveles, entre ellos, los medios de difusión y las artes para que contribuyan a modificar el modo de pensar respecto de la erradicación de la circuncisión femenina; y
- Organizar programas y seminarios adecuados de enseñanza y de capacitación basados en los resultados de las investigaciones sobre los problemas que produce la circuncisión femenina.

También se propuso a los Estados incluir estrategias y programas para erradicar estas prácticas en sus políticas nacionales de salud y que sus gobiernos facilitaran informes al Comité y solicitaran el asesoramiento de las organizaciones que forman parte del sistema de las Naciones Unidas.

En este marco, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 48/104, de 20 de diciembre de 1993 –Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer– cuyo Art. 2 incluyó *la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer* como uno de los actos comprendidos dentro del concepto de violencia contra la mujer, recordando a los Estados miembros de las Naciones Unidas, que deben condenar esta violencia sin *invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla* (art. 4). Una década más tarde, el 22 de julio de 2004, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU publicó su Plan de acción para la eliminación de las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de la mujer y el niño².

Finalmente, el suplemento sobre prácticas perjudiciales que editó ONU-Mujeres- en el año 2010, recomendó a los Estados miembros de las Naciones Unidas que definieran la mutilación genital femenina dentro de su legislación interna como *todo procedimiento, realizado dentro o fuera de una institución*

² El párrafo 43 de este Plan de acción dispone que “la violencia contra las mujeres y las niñas es un fenómeno mundial que pasa las fronteras geográficas, culturales y políticas y varía tan sólo en sus manifestaciones y en su gravedad. La violencia sexista ha existido desde tiempo inmemorial y sigue existiendo en la actualidad. Adopta formas ocultas y abiertas que implican abusos físicos y mentales. La violencia contra la mujer (que incluye la mutilación genital, la inmolación por fuego de la esposa, las violencias relacionadas con la dote, la violación, el incesto, el golpeamiento de la esposa, el feticidio y el infanticidio femeninos, el tráfico y la prostitución) es una violación de los derechos humanos y no sólo una cuestión ética. Tiene graves consecuencias negativas en el desarrollo económico y social de la mujer y de la sociedad, y es una expresión de una subordinación social de la mujer por razón de sexo”.

médica, que entrañe la ablación total o parcial de los genitales externos femeninos o cualquier otra intervención en los órganos genitales femeninos que no responda a motivos médicos. El problema, según este organismo, es que aún hay muchos países que no han incluido en sus ordenamientos *una definición específica de esta “práctica perjudicial”*, algo fundamental tanto para perseguir y castigar a los autores como para proteger y apoyar a las víctimas. Por ese motivo, formula cuatro recomendaciones desde un punto de vista normativo:

- La legislación no debe distinguir entre los distintos tipos de mutilación genital femenina con el objetivo de establecer las penas aplicables;
- Especificar con claridad que los acusados de mutilación genital femenina no pueden esgrimir en su descargo el consentimiento de la víctima;
- Tipificar como delito específico el acto de realizar una mutilación genital femenina; e
- Imponer las penas más severas aplicables en los casos de delitos contra la infancia a los autores.

En ese marco normativo se encuadra la protección de las mujeres que sufren una mutilación genital, pero la preocupación europea por estas prácticas tuvo un antecedente más específico en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, organismo que desarrolló un ingente trabajo en 2001 al aprobar dos importantes documentos: un informe del 3 de mayo que pidió la prohibición de las MGF al considerarlas un trato inhumano y degradante en el sentido del artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y la resolución 1247 (2001), de 22 de mayo, en la que solicitó a los Estados miembros que promulgaran una legislación específica que prohibiera la mutilación genital, declarándola como una violación de los derechos humanos y de la integridad corporal de las víctimas. Ese mismo año, el Parlamento Europeo también aprobó una resolución sobre las

mutilaciones genitales femeninas, la 2001/2035, de 20 de septiembre. La Cámara europea volvió a pronunciarse sobre esta materia en dos nuevas resoluciones: la resolución 2007/2093, de 16 de enero de 2008, estableciendo las prioridades en las estrategias europeas relacionadas con los derechos de los niños, para instar a los Estados miembros *a que apliquen medidas legales específicas sobre la mutilación genital femenina o a que adopten leyes que permitan la adopción de acciones penales contra toda persona que lleve a cabo actos de mutilación genital;* y la resolución 2008/2071, de 24 de marzo de 2009, dedicada, específicamente, a la lucha contra la mutilación genital femenina en la UE.

Desde el punto de vista jurídico-penal, el párrafo 28 de la resolución 2008/2071 pidió a los Estados miembros de la Unión Europea que:

- Consideren como delito cualquier MGF, independientemente de que la mujer afectada haya otorgado o no algún tipo de consentimiento, así como que se castigue a quien ayude, incite, aconseje o procure apoyo a una persona para que realice cualquiera de estos actos sobre el cuerpo de una mujer, joven o niña;
- Persigan, procesen y castiguen penalmente a cualquier residente que haya cometido el delito de MGF, aunque el delito se haya cometido fuera de sus fronteras (extraterritorialidad del delito);
- Aprueben medidas legislativas que otorguen a los jueces o fiscales la posibilidad de adoptar medidas cautelares y preventivas si tienen conocimiento de casos de mujeres o niñas en situación de riesgo de ser mutiladas.

II.- ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA IRLANDESA

Cuando el fenómeno de la mutilación afectó a Europa, debido a la inmigración de personas procedentes de países donde estas prácticas constituyen una costumbre tradicional aún en

vigor, los Estados miembros de la Unión Europea tuvieron que adoptar medidas legislativas para hacer frente a una situación que iba en contra del derecho a la integridad personal, física y mental, reconocido en sus ordenamientos jurídicos como un derecho fundamental. No obstante, hasta fechas muy recientes dos países en el marco de la Unión Europea, Italia e Irlanda, carecían de una normativa expresa que condenase penalmente en sus respectivos ordenamientos jurídicos la mutilación genital femenina. Por lo que respecta a Irlanda, los mencionados precedentes legales han llevado a este país a dotarse de una normativa sancionadora de este tipo de prácticas. Así las cosas, en el año 2008 en Irlanda se elabora un Plan de Acción Nacional para abordar esta problemática. Se trata de un Plan de carácter institucional, no gubernamental, con el objetivo de crear estrategias de colaboración coordinadas entre las instituciones para combatir estas actuaciones. Siguiendo los ejemplos de países como Noruega o Suecia, este Plan de Acción propone unir las políticas de diversos organismos con el objetivo de lograr esfuerzos concertados para evitar que prácticas como éstas se lleven a cabo dentro de sus fronteras. Las metas propuestas por este instrumento se concretan en los siguientes aspectos:

- a).- prevenir la práctica de la MGF en Irlanda
- b).- dispensar una atención de calidad adecuada a las mujeres y niñas que han sido objeto de MGF
- c).- contribuir a la campaña mundial para poner fin a la MGF a través de medidas legislativas orientadas a este fin³.

En esta misma línea de actuación, en el año 2009 se aprueba un Proyecto de Ley por el que se pretende terminar con todo tipo

³ El Plan de Acción incluye cinco epígrafes de estrategias desde los cuales la acción pretende tener efectividad en una combinación de políticas y medidas legislativas. Estos cinco ámbitos de actuación se concretan en los siguientes aspectos: aspecto legal, asilo, salud, comunidad y ayuda al desarrollo.

de MGF en Irlanda, país donde se estima que más de 3000 mujeres han sido sometidas a este tipo de intervenciones⁴. Pero en el año 2011 cuando el Comité contra la Tortura creado en el seno de la ONU, tras examinar los informes presentados por los Estados en virtud de lo establecido en el artículo 19 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes⁵, aprobó una serie de observaciones finales dirigidas al Estado irlandés que se concretan en los siguientes aspectos:

1. El Comité toma nota de la *intención* del Estado parte de examinar en trámite parlamentario el Proyecto de Ley de Justicia penal sobre la MGF que tipifica como delito esta práctica y define otros delitos conexos, alguno de los cuales entra dentro de la competencia extraterritorial de los tribunales. Sin embargo, el Comité lamenta la ausencia de una legislación que prohíba la MGF, a pesar de que los datos basados en el censo de 2006 indican que se han practicado este tipo de intervenciones a cerca de 2.600 mujeres nacionales de este Estado.
2. Este comité recomienda a Irlanda que agilice la incorporación en su legislación de la condena penal de este tipo de prácticas, constitutivas de un auténtico acto de tortura, así como que ponga en marcha programas

⁴ Vid., http://www.thejournal.ie/more-than-3000-women-in-ireland-subjected-to-genital-mutilation-says-td-350878-Feb2012/&usg=ALkJrhMnd0jGXFuUjI5s2_8OeO-IcHBFg

⁵ Dispone este precepto, en su inciso primero que “los Estados Parte presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, los informes relativos a las medidas que hayan adoptado para dar efectividad a los compromisos que han contraído en virtud de la presente Convención, dentro del plazo del año siguiente a la entrada en vigor de la Convención en lo que respecta al Estado Parte interesado. A partir de entonces, los Estados Parte presentarán informes suplementarios cada cuatro años sobre cualquier nueva disposición que se haya adoptado, así como los demás informes que solicite el Comité”.

específicos con el fin de sensibilizar a la población sobre los efectos sumamente perjudiciales de las mismas.

3. Establezca expresamente en su legislación que la mutilación genital femenina constituye un acto de tortura.

III.- CONFIGURACIÓN LEGAL DEL DELITO DE MUTILACION GENITAL FEMENINA

En cumplimiento de los compromisos asumidos por Irlanda, en abril de 2012 ha visto la luz la tan demandada Ley de Justicia penal sobre la mutilación genital femenina⁶ cuya finalidad, según consta en su preámbulo, es la configuración legal del delito de MGF así como otros delitos relacionados con esta práctica, para la protección de las menores y mujeres en general⁷. Esta Ley parte de una concepción amplia de la MGF, comprensiva de cualquier lesión de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos⁸, delimitando los actos que son constitutivos de este

⁶ Ley Número 11 de 2012, de 2 de abril.

⁷ Con motivo de la entrada en vigor de esta Ley, se van a ver modificadas las siguientes normas: Ley de Justicia Penal de 1993, Ley de finanzas de 1997 y Ley de la Infancia de 2001.

⁸ Según la Organización Mundial de la Salud, la mutilación genital femenina comprende las *lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos* –en referencia a la llamada introcisión: perforación, incisión, raspado o cauterización de la zona genital (modalidad llamada del tipo IV)– así como *todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos*, que se pueden agrupar en tres grados:

Tipo I: La clitoridectomía (ablación) es la extirpación parcial o total del clítoris (órgano pequeño, sensible y eréctil de los genitales femeninos) y, en casos muy infrecuentes, solo del prepucio (pliegue de piel que rodea el clítoris).

Tipo II: La escisión es la resección parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin extirpación de los labios mayores. Según el Parlamento Europeo, se estima que estos dos primeros grados ya *representan alrededor del 85% de las mutilaciones genitales practicadas a mujeres*; y, finalmente, la peor de todas,

Tipo III: La infibulación (también conocida como circuncisión sudanesa o faraónica) es el estrechamiento de la abertura vaginal para crear un sello

delito, incluso mediando el consentimiento de la mujer que es objeto de la intervención o aunque se trate de actos requeridos o permitidos por razones tradicionales o rituales. Se refiere, en cualquier caso, a actos realizados dentro del territorio nacional de Irlanda.

Igualmente son tipificadas como delictivas las acciones llevadas a cabo para sacar del país a una mujer con el propósito de llevar a cabo este tipo de intervenciones, salvo que se trate de actos tendentes a la protección de la salud física o mental de la paciente y así sea acreditado debidamente. No obstante, siguiendo las recomendaciones de la normativa internacional y comunitaria, la Ley irlandesa no sólo condena este tipo de prácticas si son llevadas a cabo dentro del territorio nacional, sino también las ejecutadas fuera de sus fronteras, pero limitadas a estos casos:

- a).- las practicas realizadas a bordo de un barco irlandés ⁹
- b).- las llevadas a cabo en una aeronave matriculada en el estado irlandés
- c).- las efectuadas por una persona que sea ciudadano irlandés o tenga su residencia habitual en el Estado, siempre que esta práctica constituya un delito en el lugar donde haya sido realizada.

A los efectos de lo previsto en esta Ley, se considera que una persona es residente habitual del Estado irlandés si ha tenido en él su residencia principal durante el periodo comprendido dentro de los doce meses anteriores a la presunta comisión del delito (art. 4.4). La sanción prevista por la Ley para las tres actuaciones constitutivas de delito reguladas en la misma, puede consistir en una multa o en una pena privativa de libertad por

mediante el corte y la recolocación de los labios menores o mayores, con o sin extirpación del clítoris

⁹ Vid., art. 9 de la Ley de Marina Mercante de 1955.

tiempo no superior a catorce años, aunque pueden imponerse ambas sanciones conjuntamente, sin perjuicio de que se reconozca expresamente el principio de *non bis in idem*, que impide el procesamiento de nuevo de la persona que haya sido absuelta o condenada por este delito fuera de las fronteras de Irlanda en virtud de los mismos hechos por los que fue juzgada.

En el caso de que el delito previsto en esta Ley haya sido cometido bajo el amparo de una persona jurídica, si se demuestra que el hecho fue ejecutado con el consentimiento o la connivencia del director, gerente, secretario o funcionario de la entidad corporativa o en el caso de que se trate de una persona con capacidad para actuar en nombre y representación de la entidad, será procesada y, en su caso, castigada, no sólo la persona jurídica, sino también el representante de la misma como si el delito hubiera sido cometido por él.

No obstante, la Ley trata de preservar la privacidad y el anonimato no sólo de la menor o de la mujer que ha sido objeto de esta práctica, sino también de la persona acusada de llevarla a cabo, sin perjuicio de la publicidad necesariamente exigida de la resolución judicial que pone fin al proceso, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

ANEXO

**CRIMINAL JUSTICE (Female Genital Mutilation) Act 2012
Number 11 of 2012**

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Section

1. Interpretation.
2. Offences of female genital mutilation, etc.
3. Offence of removal from State for purpose of female genital mutilation.
4. Acts, etc., done outside State.
5. Punishment for offences under sections 2, 3 and 4.
6. Proceedings.
7. Double jeopardy.
8. Exclusion of the public from hearing.
9. Anonymity of girl or woman concerned.
10. Anonymity of accused person.
11. Punishment for offences under sections 9 and 10.
12. Evidence in proceedings for offences outside State.
13. Amendment of Criminal Justice Act 1993.
14. Amendment of Bail Act 1997.
15. Amendment of Children Act 2001.
16. Short title and commencement.

Bail Act 1997, 1997, No. 16

Biological Weapons Act 2011, 2011, No. 13

Children Act 2001, 2001, No. 24

Criminal Justice Act 1993, 1993, No. 6

Criminal Procedure Act 2010, 2010, No. 27

Medical Practitioners Act 2007, 2007, No. 25

Mercantile Marine Act 1955, 1955, No. 29

Nurses Act 1985, 1985, No. 18

**CRIMINAL JUSTICE (FEMALE GENITAL MUTILATION)
ACT 2012**

AN ACT TO PROVIDE FOR THE CREATION OF AN OFFENCE OF FEMALE GENITAL MUTILATION, AND OTHER OFFENCES RELATING TO FEMALE GENITAL MUTILATION, FOR THE BETTER PROTECTION OF GIRLS AND WOMEN; TO PROVIDE FOR AMENDMENTS TO OTHER ENACTMENTS; AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS. [2nd April, 2012]

BE IT ENACTED BY THE OIREACHTAS AS FOLLOWS:

Interpretation.

1.- In this Act-

"female genital mutilation" means any act the purpose of which, or the effect of which, is the excision, infibulation or other mutilation of the whole or any part of the labia majora, labia minora, prepuce of the clitoris, clitoris or vagina of a girl or woman;

"midwife" means a person whose name is registered in the midwives division of the register of nurses established under section 27 of the Nurses Act 1985;

"registered medical practitioner" has the same meaning as it has in section 2 of the Medical Practitioners Act 2007.

Offences of female genital mutilation, etc.

2.- (1) A person is guilty of an offence if the person does or attempts to do an act of female genital mutilation.

(2) A person is not guilty of an offence under subsection (1) if-

(a) the act concerned is a surgical operation performed by a registered medical practitioner on the girl or woman concerned, which is necessary for the protection of her physical or mental health,

(b) the act concerned is a surgical operation performed by a registered medical practitioner or a midwife, or a person undergoing training to be a midwife, on the girl or woman concerned when she is in any stage of labour, or has just given birth, for purposes connected with the labour or birth,

(c) the person is the girl or woman on whom the act of female genital mutilation is done, or

(d) the act concerned is done to a woman who is not less than 18 years of age and there is no resultant permanent bodily harm.

(3) For the avoidance of doubt, it is hereby declared that it shall not be a defence to proceedings for an offence under this section for the accused person to show that he or she believed that the act concerned was consented to by the girl concerned or her parents or guardian, or the woman concerned, as the case may be, or required or permitted for customary or ritual reasons.

Offence of removal from State for purpose of female genital mutilation.

3.- (1) A person is guilty of an offence if the person removes or attempts to remove a girl or woman from the State where one of the purposes for the removal is to have an act of female genital mutilation done to her.

(2) A person is not guilty of an offence under subsection (1) if the act is done and is-

(a) a surgical operation performed, by a person who is duly qualified to perform surgical operations under the law of the place where the act is done, or has been professionally trained to perform surgical operations, on the girl or woman concerned, which is necessary for the protection of her physical or mental health,

(b) a surgical operation performed, by a person performing functions corresponding to those of a midwife or a registered medical practitioner, on the girl or woman concerned when she is in any stage of labour, or has just given birth, for purposes connected with the labour or birth, or

(c) done to a woman who is not less than 18 years of age, and there is no resultant permanent bodily harm.

(3) In proceedings for an offence under subsection (1), it shall be presumed, until the contrary is shown, that one of the purposes for the removal from the State by the accused person of the girl or woman concerned was to have an act of female genital mutilation done to her if-

(a) the accused person removed the girl or woman from the State in circumstances giving rise to the reasonable inference that one of the purposes for such removal was to have an act of female genital mutilation done to her, and

(b) an act of female genital mutilation was done to her after she was removed from the State and, where she subsequently returned to the State, before that return.

(4) For the avoidance of doubt, it is hereby declared that it shall not be a defence to proceedings for an offence under this section for the accused person to show that he or she believed that the act concerned was consented to by the girl concerned or her parents or guardian, or the woman concerned, as the case may be, or required or permitted for customary or ritual reasons.

(5) For the purposes of this section, to "remove a girl or woman from the State" includes-

- (a) arranging any part of her travel out of the State,
- (b) accompanying her for any portion of that travel,
- (c) arranging that she be met when her travel out of the State has terminated, or
- (d) doing any other act that could facilitate her travel out of the State.

Acts, etc., done outside State.

4.- (1) A person is guilty of an offence if the person does or attempts to do an act of female genital mutilation in a place other than the State, but only if it is done or attempted to be done-

(a) on board an Irish ship within the meaning of section 9 of the Mercantile Marine Act 1955,

(b) on an aircraft registered in the State, or

(c) by a person who is a citizen of Ireland or is ordinarily resident in the State, and would constitute an offence in the place in which it is done.

(2) A person is not guilty of an offence under subsection (1) if-

(a) the act concerned is a surgical operation performed, by a person who is duly qualified to perform surgical operations under the law of the place where the act is done, or has been professionally trained to perform surgical operations, on the girl or woman concerned, which is necessary for the protection of her physical or mental health,

(b) the act concerned is a surgical operation performed, by a person performing functions corresponding to those of a midwife or a registered medical practitioner, on the girl or woman concerned when she is in any stage of labour, or has just given birth, for purposes connected with the labour or birth,

(c) the person is the girl or woman on whom the act of female genital mutilation is done, or

(d) the act concerned is done to a woman who is not less than 18 years of age and there is no resultant permanent bodily harm.

(3) For the avoidance of doubt, it is hereby declared that it shall not be a defence to proceedings for an offence under this section for the accused person to show that he or she believed that the act concerned was consented to by the girl concerned or her parents or guardian, or the woman concerned, as the case may be, or required or permitted for customary or ritual reasons.

(4) For the purposes of proceedings for an offence under this section, a person shall be deemed to be ordinarily resident in the State if he or she has had his or her principal residence within the State for the period of 12 months immediately preceding the alleged commission of the offence.

(5) Proceedings for an offence under this section may be taken in any place in the State and the offence may for all incidental purposes be treated as having been committed in that place.

Punishment for offences under sections 2, 3 and 4.

5.- A person who is guilty of an offence under section 2, 3 or 4 is liable-

(a) on summary conviction to a class A fine or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both, and

(b) on conviction on indictment to a fine or imprisonment for a term not exceeding 14 years or to both.

Proceedings.

6.- Proceedings may not be instituted under this Act except by, or with the consent of, the Director of Public Prosecutions.

Double jeopardy.

7.- A person who is acquitted or convicted of an offence in a place outside the State shall not be proceeded against for an offence under this Act consisting of the act that constituted the offence of which the person was so acquitted or convicted.

Exclusion of the public from hearing.

8.- (1) Subject to subsections (2) and (3), in any proceedings for an offence under section 2, 3 or 4, the judge or the court, as the case may be, shall exclude from the court during the hearing all persons except officers of the court, persons directly concerned in the proceedings, bona fide representatives of the Press and such other persons (if any) as the judge or the court, as the case may be, may in his or her or its discretion permit to remain.

(2) Subsection (1) is without prejudice to the right of a parent, relative or friend of the girl or woman in respect of whom the offence is alleged to have been committed or, where the accused person is not of full age, of the accused person, to remain in court.

(3) In any proceedings to which subsection (1) applies, the verdict or decision and the sentence (if any) shall be announced in public.

Anonymity of girl or woman concerned.

9.- (1) Subject to subsection (8)(a), after a person is charged with an offence under this Act, no matter likely to lead members of the public to identify a girl or woman as the girl or woman in respect of whom the offence is alleged to have been committed shall be published in a written publication available to the public or be broadcast except as authorised by a direction given in pursuance of this section.

(2) If, at any stage before the commencement of a trial of a person for an offence under this Act, the accused person or

another person against whom the girl or woman concerned may be expected to give evidence at the trial applies to a judge of the High Court or Circuit Court for a direction in pursuance of this subsection and satisfies the judge-

(a) that the direction is required for the purpose of inducing persons to come forward who are likely to be needed as witnesses at the trial, and

(b) that the conduct of the applicant's defence at the trial is likely to be adversely affected if the direction is not given, the judge shall direct that subsection (1) shall not, by virtue of the charge alleging the offence, apply to such matter relating to that girl or woman as is specified in the direction.

(3) If, at a trial of a person for an offence under this Act, the accused or another person who is also charged at the trial applies to the judge for a direction in pursuance of this subsection and satisfies the judge-

(a) that the direction is required for the purpose of inducing persons to come forward who are likely to be needed as witnesses at the trial,

(b) that the conduct of the applicant's defence at the trial is likely to be adversely affected if the direction is not given, and

(c) that there was good reason for the applicant's not having made an application under subsection (2) before the commencement of the trial, the judge shall direct that subsection (1) shall not, by virtue of the charge alleging the offence, apply to such matter relating to the girl or woman concerned as is specified in the direction.

(4) If, at a trial for an offence under this Act, the judge is satisfied that the effect of subsection (1) is to impose a substantial and unreasonable restriction on the reporting of proceedings at the trial and that it is in the public interest to remove or relax the restriction, he or she shall direct that that subsection shall not apply to such matter relating to the girl or woman concerned as is

specified in the direction; but a direction shall not be given in pursuance of this subsection by reason only of the outcome of the trial.

(5) If a person who has been convicted of an offence and given notice of appeal against the conviction, or, on conviction on indictment, notice of an application for leave so to appeal, applies to the appellate court for a direction in pursuance of this subsection and satisfies the court-

(a) that the direction is required for the purpose of obtaining evidence in support of the appeal, and

(b) that the applicant is likely to suffer injustice if the direction is not given, the court shall direct that subsection (1) shall not apply to such matter relating to the girl or woman concerned and the offence as is specified in the direction.

(6) If any matter is published or broadcast in contravention of subsection (1), the following persons, namely-

(a) in the case of a publication in a newspaper or periodical, any proprietor, any editor and any publisher of the newspaper or periodical,

(b) in the case of any other publication, the person who publishes it, and

(c) in the case of a broadcast, any body corporate which transmits or provides the programme in which the broadcast is made and any person having functions in relation to the programme corresponding to those of an editor of a newspaper, shall be guilty of an offence.

(7) In this section-

"broadcast" means broadcast by wireless telegraphy of sound or visual images intended for general reception;

"written publication" includes a film, a sound track and any other record in permanent form but does not include an indictment or other document prepared for use in particular legal proceedings.

(8) Nothing in this section-

(a) prohibits the publication or broadcasting of matter consisting only of a report of legal proceedings other than proceedings at, or intended to lead to, or on an appeal arising out of, a trial at which the accused person is charged with an offence under this Act, or

(b) affects any prohibition or restriction imposed by virtue of any other enactment upon a publication or broadcast.

(9) A direction in pursuance of this section does not affect the operation of subsection (1) at any time before the direction is given.

(10) If, after the commencement of a trial of a person for an offence under this Act, a new trial of the person for that offence is ordered, the commencement of any previous trial of that person for that offence shall be disregarded for the purposes of subsections (2) and (3).

Anonymity of accused person.

10.- (1) After a person is charged with an offence under this Act, no matter likely to lead members of the public to identify him or her as the person against whom the charge is made shall be published in a written publication available to the public or be broadcast except

(a) as authorised by a direction given in pursuance of this section or by virtue of section 9 (8)(a) as applied by subsection (6) of this section, or

(b) after he or she has been convicted of the offence.

(2) (a) If a person charged with an offence under this Act applies in that behalf to a judge of the High Court before the commencement of the trial or to the judge at the trial, the judge shall, subject to paragraph (b), direct that subsection (1) shall not apply to the person in relation to the charge.

(b) The judge shall not give the direction if it appears to the judge that, if the direction were given, the publication of any matter in pursuance of the direction might enable members of the public to identify a girl or woman as the girl or woman in respect of whom the offence is alleged to have been committed, unless he or she is satisfied that a direction could properly be given in relation to that person in pursuance of section 9 .

(3) If, at any stage before the commencement of a trial of a person for an offence under this Act, another person who is to be charged with an offence under this Act at the trial applies to a judge of the High Court or Circuit Court for a direction in pursuance of this subsection and satisfies the judge-

(a) that the direction is required for the purpose of inducing persons to come forward who are likely to be needed as witnesses at the trial, and

(b) that the conduct of the applicant's defence at the trial is likely to be adversely affected if the direction is not given, the judge shall direct that subsection (1) shall not, by virtue of the charge alleging the offence, apply to such matter relating to the first-mentioned person as is specified in the direction.

(4) If, at a trial of a person for an offence under this Act, another person who is also charged at the trial applies to the judge for a direction in pursuance of this subsection and satisfies the judge-

(a) that the direction is required for the purpose of inducing persons to come forward who are likely to be needed as witnesses at the trial,

(b) that the conduct of the applicant's defence is likely to be adversely affected if the direction is not given, and

(c) that there was good reason for the applicant's not having made an application under subsection (3) before the commencement of the trial, the judge shall direct that subsection (1) shall not, by virtue of the charge alleging the offence, apply to

such matter relating to the first-mentioned person as is specified in the direction.

(5) If, at a trial at which a person is charged with an offence under this Act, the judge is satisfied that the effect of subsection (1) is to impose a substantial and unreasonable restriction on the reporting of proceedings at the trial and that it is in the public interest to remove or relax the restriction in respect of that person, the judge shall direct that subsection (1) shall not, by virtue of the charge alleging the offence, apply to such matter relating to that person as is specified in the direction.

(6) Subsections (6) to (9) of section 9 shall have effect for the purposes of this section as if for references to that section there were substituted references to this section.

(7) If, after the commencement of a trial of a person for an offence under this Act, a new trial of the person for that offence is ordered, the commencement of any previous trial of that person for that offence shall be disregarded for the purposes of subsections (2), (3) and (4).

(8) If, at any time after a person is charged with an offence under this Act, the Director of Public Prosecutions applies in that behalf to a judge of the High Court, the judge, if he or she is satisfied that it is in the public interest to do so, shall direct that subsection (1) shall not apply to such matter relating to the person charged with the offence as is specified in the direction.

Punishment for offences under sections 9 and 10.

11.- (1) A person who is guilty of an offence under section 9 (6) (including an offence under that section as applied by section 10 (6)) is liable-

(a) on summary conviction to a class A fine or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both, and

(b) on conviction on indictment to a fine not exceeding €10,000 or imprisonment for a term not exceeding 3 years or to both.

(2) Where an offence referred to in subsection (1) has been committed by a body corporate and it is proved that the offence was committed with the consent or connivance, or was attributable to any wilful neglect, of a person who, when the offence was committed, was a director, manager, secretary or other officer of the body corporate, or a person purporting to act in that capacity, that person, as well as the body corporate, is guilty of an offence and may be proceeded against and punished as if he or she were guilty of the first-mentioned offence.

(3) Where the affairs of a body corporate are managed by its members, subsection (2) applies in relation to the acts and defaults of a member in connection with his or her functions of management as if he or she were a director or manager of the body corporate.

Evidence in proceedings for offences outside State.

12.- (1) In any proceedings relating to an offence under section 4 in the circumstances referred to in subsection (1)(c) of that section-

(a) a certificate that is signed by an officer of the Minister for Foreign Affairs and Trade and stating that a passport was issued by that Minister of the Government to a person on a specified date, and

(b) a certificate that is signed by an officer of the Minister for Justice and Equality and stating that, to the best of the officer's knowledge and belief, the person has not ceased to be a citizen of Ireland, shall be evidence that the person was a citizen of Ireland on the date on which the offence concerned is alleged to have been committed, unless the contrary is shown.

(2) A document purporting to be a certificate under paragraph (a) or (b) of subsection (1) is deemed, unless the contrary is shown-

- (a) to be such a certificate, and
- (b) to have been signed by the person purporting to have signed it.

Amendment of Criminal Justice Act 1993.

13.- Subsection (1) of section 5 (inserted by section 4 of the Criminal Procedure Act 2010) of the Criminal Justice Act 1993 is amended-

- (a) in paragraph (c), by deleting "and",
- (b) by inserting the following paragraph after paragraph (c):
"(ca) an offence under section 2, 3 or 4 of the Criminal Justice (Female Genital Mutilation) Act 2012, and",
- (c) in paragraph (d), by substituting "paragraph (a), (b), (c) or (ca)" for "paragraph (a), (b) or (c)".

Amendment of Bail Act 1997.

14.- The Schedule to the section 13 of the Biological Weapons Act 2011):

"Offences relating to female genital mutilation

38. An offence under section 2, 3 or 4 of the Criminal Justice (Female Genital Mutilation) Act 2012."

Amendment of Children Act 2001.

15.- Schedule 1 to the Children Act 2001 is amended by inserting the following paragraph after paragraph 9:

"9A. An offence under section 2, 3 or 4 of the Criminal Justice (Female Genital Mutilation) Act 2012."

Short title and commencement.

16.- (1) This Act may be cited as the Criminal Justice (Female Genital Mutilation) Act 2012.

(2) This Act shall come into operation on such day or days as the Minister may appoint by order or orders either generally or with reference to any particular purpose or provision and different days may be so appointed for different purposes or provisions.

